

EL MUNDO

Domingo, 10 de octubre de 2004. Año XV. Número: 5.419.

MUNDO

RADIOGRAFIA DE MARRUECOS (I) / EL PODER POLITICO Y ECONOMICO / NUESTRO 'AMIGO' DEL SUR / EL PAPEL DE LA MONARQUIA

El primer banquero y empresario, el rey

CARLOS SEGOVIA. Enviado Especial

El Gobierno está intentando relanzar las relaciones con Marruecos, el vecino del Sur, con fe total en la voluntad de democratización del rey Mohamed VI. Éste, tras cinco años en el trono, ha dado algunos pasos hacia delante y hacia atrás que hacen que su país diste aún mucho de una democracia homologable, pese a que así se presenta su régimen desde la época de su padre Hasan II. La Constitución vigente aún confiere al rey una autoridad absoluta en los tres poderes clásicos: ejecutivo, legislativo y judicial. Y, por si fuera poco, Mohamed VI se ha adentrado aún más que su padre en otro poder del mundo moderno: el financiero y empresarial. El monarca no sólo quita y pone ministros, disuelve parlamentos o designa magistrados, autoridades económicas provinciales y locales, sino que controla una treintena de empresas que operan en distintos sectores. La familia real controla donde los marroquíes depositan sus ahorros o los supermercados en los que compran. En paralelo, asciende el integrismo islámico en el país y Occidente considera que en esta fase hay que apoyar al joven monarca.

EL MUNDO repasa a partir de hoy la situación de un país que dista de España y, por tanto, de la UE y de la OTAN, apenas 14 kilómetros al sur de Algeciras.

RABAT.- A las 18 horas del 7 de septiembre estaba todo listo en el hotel Sofitel Diwan de Rabat para albergar una rueda de prensa sobre el Festival de Andalucías Atlánticas, un evento cultural hispano-marroquí a celebrar en la localidad de Essaouira. Pero la mayoría de los asistentes no son periodistas, sino máximos representantes de empresas españolas y marroquíes o altos funcionarios y autoridades locales. ¿Por qué?

El anfitrión, el promotor del Festival, es André Azulay, consejero económico real, un veterano de Palacio que ha conservado con Mohamed VI la influencia adquirida en la era de Hasán II. Cuando concluye la rueda de prensa, un cortejo de asistentes hace cola para poder conversar unos minutos con Azulay. Éste va concediendo audiencia pacientemente en un aparte de la sala y dedica cortésmente unos minutos, uno por uno, a cada interesado.

Estos «amigos» -así los llama Azulay- le van pidiendo una mediación ante el rey, un apoyo, un favor, una concesión, porque saben que el selecto grupo de consejeros reales, dispone de más poder que el jefe del Gobierno, Driss Yetu.

El Palacio Real no sólo manda en política, sino cada vez más, en la economía. El rey Mohamed VI se autocalifica «monarca ejecutivo» y sigue presidiendo el Gobierno, puede disolver el Parlamento y designa a los miembros cúpula del poder judicial. Es además el líder espiritual, según la Constitución vigente.

Pero en los últimos meses, el garante de la integridad de Marruecos, el príncipe de los creyentes, se ha decidido a ampliar su hegemonía en el terreno financiero y empresarial. Con el grupo Siger (el nombre está tomado de la palabra latina regis al revés) y la sociedad gemela Ergis (otro juego con el latín) como casa matriz y el súper grupo financiero industrial Omnium Nord Africain (ONA) como buque insignia, el rey es el primer empresario y banquero del país. La ONA posee, por ejemplo, los supermercados Marjan, una flota de pesqueros en Agadir y promueve la zona franca de Tánger para intentar arrebatar negocio portuario a Ceuta y Algeciras.

En suma, la familia real dirige directa o indirectamente las empresas que representan el 65% de la capitalización de la Bolsa de Casablanca. Es decir, que controla empresas por valor de 9.000 millones de euros.

El grupo Siger ha protagonizado en los últimos tiempos un refuerzo del control de ONA. Con ese objetivo, ha adquirido acciones a entidades incluso del Estado y a precios que los analistas califican cautamente de «discutibles». Un ejemplo es la Caja de Depósito y Gestión, entidad estatal que intenta salvar empresas marroquíes en dificultades y que cedió su 3% de ONA a la familia real a un precio inferior en un 20% al de mercado. El grupo Siger está dirigido por Mohamed Mounir Majidi, el secretario particular del rey. A éste se atribuye además el control de la empresa de vallas publicitarias Fc Com, que monopoliza la publicidad urbana y es contratada a menudo por el Estado para campañas oficiales o incluso para exhibir el retrato del propio Rey (ver fotografía).

A esta influencia económica hay que añadir las empresas que no cotizan en Bolsa, como las explotaciones agrícolas o el grupo industrial Primarios.

¿A cuánto asciende el patrimonio real? Es un secreto que incluye propiedades urbanísticas en el interior y en el exterior. La familia real ha adquirido, por ejemplo, terrenos en el privilegiado monte de Cabo Negro -que preside una emergente área turística a 30 kilómetros al sur de Ceuta- para un proyecto de promoción inmobiliaria, según no ocultan las autoridades locales. Mohamed VI, gran aficionado a la moto náutica, disfruta cada vez más del cercano Palacio Real que posee en esa zona del Mediterráneo y quiere apostar por el área.

Los consejeros reales consideran las inversiones como una contribución de su majestad a impulsar el desarrollo económico del país y la formación de campeones nacionales frente a las multinacionales extranjeras. Pero para los empresarios que tienen que competir con el rey no es fácil entrar en el mercado. «Hay malos hábitos de presencia en la economía que es necesario corregir», afirma escuetamente al respecto el jefe de delegación de la Comisión Europea en Marruecos, el irlandés Seán Doyle. «Lo mejor que pueden hacer los empresarios que se adentren en sectores controlados por el Palacio Real es aliarse al monarca, como ha hecho el BSCH y Danone», comenta un analista.

El grupo que preside Emilio Botín es, tras la familia real marroquí, el segundo accionista del Banco Comercial de Marruecos (BCM). El BCM ha adquirido este año Wafabank y se ha convertido de largo en la primera entidad bancaria del país.

«Es una depredación alarmante», ha sostenido el semanario independiente marroquí Le Journal, que critica que la dinastía alauí -y, con ella, el régimen- extienda sus tentáculos en sectores clave para la modernización del país. Se da además la circunstancia de que el rey nombra en exclusiva a los presidentes del banco central y de la CDVM, el organismo que controla el mercado de valores.

«Que el rey nombre a los que deben controlar sus asuntos económicos contradice todos los principios de buen gobierno económico», resalta el semanario. Y pocos osan mencionar el patrimonio real en el exterior. El jeque Yasin, el líder de la asociación islamista Justicia y Espiritualidad, la más fuerte de Marruecos aunque no participe en las elecciones, instó en 2000 al rey a que repatriara los «entre 40.000 y 50.000 millones de dólares que Hasán II depositó en el extranjero para emancipar el país del yugo del Banco Mundial y sacarlo de la situación de crisis y desesperación en que vive la población». Según Economie et Enterprises hay agujeros en las empresas del Estado desde la época de Hasán II por valor de 40.000 millones de dólares.

La figura de Mohamed VI no es tan respetada ni temida como la de Hasan II, pero su poder sigue siendo omnímodo en Marruecos, país al que los gobiernos occidentales, incluido el español, consideran en fase de esperanzadora transición democrática. «¿Qué transición?», se preguntaba Le Journal en su número especial de este verano sobre el quinto aniversario del nuevo rey.

«Hemos querido que este Estado moderno sea un Estado de Derecho en que la ley esté por encima de todos e inspire confianza a todos, un Estado que garantice las libertades y se desmarque de cualquier práctica o legislaciones contrarias a los Derechos Humanos», ha afirmado el rey. ¿Mohamed VI? No. Estas palabras fueron pronunciadas el 3 de marzo de 1996 por su padre, Hasan

II. El discurso, el deseo real de presentar el país como una democracia homologable a la occidental, sigue igual, pero no se concreta todavía con las reformas necesarias.

«Tenemos un rey joven que impulsa una transición democrática y hay que ayudarlo. Hay problemas, pero estamos en el buen camino», afirma Mohamed Rharrabi, el hombre al que, tras gobernar el área de Perejil en 2002, Mohamed VI ha encomendado gobernar el área más importante del Sahara Occidental.

«El rey está bien aconsejado y tiene una voluntad real de democratización, aunque aún quedan problemas», señala el irlandés Doyle. Este menciona el fundamentalismo, la droga o la corrupción y elogia al Gobierno de Driss Yetu, pero señala que «no debe retroceder».

El poder del rey neutraliza iniciativas de Yetu y aletarga a la clase política, según Saad Eddine Otmani, nuevo secretario general del Partido Justicia y Desarrollo (PJD), la fuerza islamista moderada que ejerce la oposición parlamentaria frente al abanico de partidos de todas las tendencias que forman parte de la coalición gubernamental. No es fácil enfrentarse al poder. Cada parlamentario gana 3.700 euros mensuales, una cantidad similar a la de sus homólogos españoles, pese a la diferencia de renta entre ambos países.

Con las fuerzas políticas embotadas, Oumama Aouad Lahrech, profesora de Español en la Universidad Mohamed V, sitúa el «margen para la esperanza en la sociedad civil».

«El régimen debe dejar de hacer tonterías, como permitir que el rey, que no es un gran trabajador, haga esperar o incluso anular arbitrariamente visitas internacionales ya concertadas», lamenta por su parte, un diplomático occidental que no quiere ser citado. Según la Constitución, la figura del rey es «sagrada».

EL MUNDO

Lunes, 11 de octubre de 2004. Año XV. Número: 5.420.

MUNDO

**RADIOGRAFIA DE NUESTRO AMIGO DEL SUR (II) / ECONOMIA Y SOCIEDAD /
AUMENTA LA POBREZA**

España y Marruecos son los países vecinos con mayor diferencia de renta del mundo

En 20 años la distancia ha pasado de 6 a 13 veces

CARLOS SEGOVIA. Enviado especial

El régimen marroquí no ha logrado hasta ahora aumentar la prosperidad de su pueblo en niveles que puedan contener la inmigración. Al contrario, el desequilibrio de riqueza entre España y Marruecos ha aumentado hasta niveles desconocidos en el resto de fronteras Norte-Sur del mundo. El éxodo rural, la pérdida de competitividad en la liberalización del comercio mundial y la corrupción han contribuido a generar un aumento de la pobreza que alcanza ya a un 25% de la población (siete millones de habitantes).

Y todo con niveles educativos mínimos, puesto que uno de cada dos habitantes de Marruecos sigue sin saber leer o escribir y las nuevas generaciones apenas aguantan tres años de escolarización. Con estos mimbres, se forman colas gigantescas ante los consulados españoles para intentar una vida mejor y, el que no logra conseguir visado ni falsificándolo, se pone en manos de las mafias de la inmigración clandestina. La inversión extranjera (España superó el pasado año a Francia por primera vez) no está siendo suficiente dado los mínimos salarios que se pagan.

Y el Estado no garantiza derecho de paro suficiente ni, al menos, asistencia médica universal. Las reformas prometidas por Mohamed VI y el Gobierno de Driss Yetu no terminan de llegar.

TETUAN.- Junto al número 34 de la avenida peatonal Mohamed V de Tetuán que da sede al consulado general de España hay un zapatero que por unos dirhams ayuda a rellenar papeles de petición de visado a las decenas de marroquíes que, sin saber leer o escribir, solicitan cada día autorización para ir a España.

No es lo único que tienen que pagar antes de pisar la sede consular. Algunos de

los que claramente no reúnen los requisitos mínimos tienen que abonar dinero al funcionario municipal marroquí de turno para que conseguir certificados -con aspecto de auténticos- requeridos por el consulado español.

Según las cifras oficiales, los consulados españoles en Marruecos tramitan más de 100.000 peticiones de visado de personas que alegan querer hacer una visita turística, estudiar, residir, trabajar o lo que sea en España. Sólo Rusia (176.000 en 2003), debido al auge del turismo, supera a Marruecos en peticiones de visado con destino a España.

Y eso son los que intentan entrar legalmente. El Gobierno español reconoció en 2003 haber devuelto a Marruecos a 24.000 ciudadanos de ese país. Y hay censados legalmente en España 350.000 marroquíes.

No hay otra área en el mundo en la que un vecino pueda tener más interés en desplazarse al territorio del otro en busca de horizonte de vida. La frontera económica entre España y Marruecos es la más grande del mundo, según datos -basados en los del Banco Mundial- del economista Mehdi Lahlou, profesor del Instituto Nacional de Estadística y Economía Aplicada de Rabat, corroborados por fuentes diplomáticas españolas.

Cada español disfruta teóricamente de una renta per cápita de 17.000 dólares, mientras que cada marroquí no llega a 1.300 y, además, está experimentando un descenso en los últimos años en términos reales. «Hace 20 años, la renta per cápita española era seis veces superior a la marroquí; la estadounidense, 13 veces superior a la mexicana; y la alemana, 12 veces mayor que la polaca», subraya Lahlou.

«Ahora la renta per cápita española es 13 veces mayor que la marroquí mientras que la estadounidense es ya sólo seis veces mayor que la mexicana y la alemana sólo cinco veces la polaca», lamenta este economista, que ni siquiera ha encontrado más distancia entre las dos Coreas.

Lahlou critica el fracaso económico del régimen marroquí y subraya al tiempo la inyección de fondos europeos que ha recibido España como factores para que el desequilibrio aumente. Y eso con una población como la marroquí en la que el 60% tiene menos de 25 años, con la emigración como mejor perspectiva de vida.

En opinión del profesor marroquí, «las perspectivas no son buenas, porque arrastramos un largo periodo de crecimiento muy débil del Producto Interior Bruto. La tasa de inversión es mínima y hasta el 25% de la población se encuentra por debajo de los umbrales de pobreza».

El ministro de Exteriores de Marruecos, Mohamed Benaissa, pidió ayer en el Foro Formentor que la UE ofrezca un estatus especial a Marruecos y que incremente las ayudas en el próximo programa plurianual para el periodo 2007-2013.

Lahlou cree que, para obtener esa relación privilegiada, la solución es que el Gobierno de Marruecos afronte «una reforma institucional y económica». La ayuda de la UE para construir infraestructuras, atraer inversión y modernizar los sectores agrícola y pesquero, entre otros, son esenciales a su juicio.

«Hay razones para entender que los marroquíes se sientan decepcionados. Hassan II creyó antes de la caída del Muro que la única área de expansión de la entonces Comunidad Económica Europea sería el Sur, porque no habría posibilidad con la Europa del Este. Pero todo el escenario que soñaba se desmoronó», admite Seán Doyle, el jefe de la delegación de la Comisión Europea en Rabat. Éste subraya, no obstante, que la UE destina 150 millones de euros anuales a Marruecos.

Pero todo es poco, sobre todo también si la ayuda que se recibe no está bien gestionada. Según datos del Banco Mundial, mientras que la pobreza en Túnez o Argelia se estabiliza, en Marruecos ha aumentado en seis puntos en la última década y alcanza a un 25% de la población, es decir a siete millones de personas que viven con menos de un dólar al día.

De los 28 millones de habitantes en Marruecos, el 50% son analfabetos y la tasa llega al 62% en el caso de las mujeres (más aún en áreas rurales). El 75% de los estudiantes de bachillerato en el sistema público han suspendido en el último curso. Lahlou destaca que el tiempo medio de escolarización de los niños no llega a tres años.

El politólogo Mohamed Tozy atribuye este mínimo nivel educativo al desinterés del régimen durante décadas por alfabetizar a la población. «Ahora están intentando recuperar el tiempo perdido, pero las necesidades son enormes y va a llevar mucho tiempo», lamenta.

La esperanza de vida (68,4 años) es diez años inferior a la española. El uso de energía eléctrica en Marruecos es diez veces inferior que en España y el acceso a agua, muy limitado. En España mueren cinco de cada mil niños menores de cinco años. En Marruecos, 43. En la era de Internet, sólo hay en Marruecos 23 ordenadores por cada mil habitantes, mientras que en España, pese que no es un modelo en Occidente en este terreno, hay diez veces más.

Sólo el 20% de la población marroquí cuenta con seguro médico y sólo la mitad de los apenas dos millones de trabajadores por cuenta ajena alcanza algún subsidio de paro.

Y a ello hay que unir la corrupción, extendida a pequeña, media y gran escala en la Administración marroquí, según todos los informes internacionales. En el índice de percepción de la corrupción de la organización Transparency International, Marruecos aparece en el puesto 70 de 133, peor que países como Colombia o Bielorrusia.

Ante todo este panorama, «es necesario que el país no pierda credibilidad», afirma el eurofuncionario Doyle para que atraiga capital.

El primer ministro marroquí, Driss Yetu, reclama en todos los foros posibles más inversión extranjera en el país y acoge en su despacho a todo empresario que llegue con intención de poner dinero. Así lo acaba de hacer con el presidente del grupo inmobiliario Fadesa, Manuel Jové, que ha lanzado un proyecto turístico en la localidad de Saidia con capacidad de 30.000 camas, puerto deportivo y campo de golf.

España se convirtió en 2003 en el primer inversor extranjero en Marruecos, por encima, por primera vez, de Francia. La razón de este fenómeno, probablemente muy coyuntural, es que salió formalmente de su sede de Madrid, y no de la de París, el dinero con el que el grupo hispano-francés Altadis pagó su entrada en el privatizado monopolio de tabacos en Marruecos.

Unas 600 empresas españolas mantienen inversiones en el país vecino. «Lo más barato es la mano de obra, porque los costes de energía, transporte o telecomunicaciones pueden ser más altos que en España», explica un asesor económico español. Un salario mensual medio en las fábricas españolas trasladadas a Marruecos no llega a los 3.000 dirhams (285 euros). Y eso que, según este asesor, «las empresas españolas y extranjeras en general pagan más que las marroquíes».

Abdelhamid Amine, dirigente sindical de la Unión Marroquí de Trabajadores (UMT) asegura que «las empresas extranjeras se aprovechan en general de la tradición marroquí de vulnerar los derechos de los trabajadores y explotar así más a la mano de obra». «Hay empresas que llegan del extranjero con buena intención, pero siempre se unen a empresas locales que les empujan a ignorar las leyes y les dicen, con razón, que no se corre ningún riesgo», agrega. Mientras llega capital extranjero, una fuente esencial de ingresos para la economía marroquí son las transferencias que realizan los emigrantes marroquíes. Hasta 4.000 millones de dólares, el 9% del Producto Interior Bruto marroquí, envían cada año a sus familiares, constituyendo la mayor fuente de ingreso de divisas del país -además de la droga- según el Fondo Monetario Internacional.

«Una cantidad equivalente a un tercio de ese dinero se queda en España

durante la Operación Paso del Estrecho cada verano», asegura Lahlou. Para este economista, España se queja de los nueve millones de euros que cuesta al Estado organizar la operación, pero «ese dinero se compensa con creces con 2,5 millones de marroquíes que pasan entre tres y cinco noches cada año en España para cruzar el Estrecho, echando gasolina, comiendo o comprando billetes de barco».

En paralelo al negocio de la emigración legal, funciona también el de la clandestina. Fabricantes de pateras, mafiosos de ambos lados del Estrecho y falsificadores viven del sueño de los demás de salir de la penuria y de franquear la frontera. También se aprovecha, más modestamente, el letrado zapatero de Tetuán.

EL MUNDO

Martes, 12 de octubre de 2004. Año XV. Número: 5.421.

MUNDO

RADIOGRAFIA DE NUESTRO AMIGO DEL SUR (III) / LA INFLUENCIA DE LA RELIGION / NUESTRO 'AMIGO' DEL SUR / EL ASCENSO DEL ISLAM COMO IDEOLOGIA

El 40% de los marroquíes apoya a movimientos islamistas según un informe de la embajada española

Aisa Acharki, dirigente de Justicia y Espiritualidad: «Zapatero es listo, tiene visión, no merece otro 11-M»

CARLOS SEGOVIA. Enviado especial

Con la clase política paralizada por la influencia del Palacio Real y con una situación socioeconómica estancada, el islamismo está consiguiendo capitalizar buena parte del descontento de la población.

El fenómeno es especialmente intenso justamente en la zona más sensible para España, en el norte, en torno a Tánger y Tetuán, de donde proceden la mayor parte de los autores materiales de los atentados del 11-M.

El régimen marroquí, que ha estimulado en el pasado el ascenso islamista, ha emprendido este verano una reforma administrativa que incluye la creación de dos nuevas provincias en torno a Ceuta. La medida es interpretada por la diplomacia española como un movimiento favorable para reforzar el control en la zona, fomentar su desarrollo económico y frenar el islamismo.

Todos los observadores dan por hecho que las fuerzas islamistas se impondrían en todo el país si pudieran presentarse en todas las circunscripciones en las próximas elecciones generales de 2007. Mustafa Ramid, el líder islamista del Partido Justicia y Desarrollo más popular, asegura a EL MUNDO que su fuerza política tiene «vocación de Gobierno» y reclama que el rey ceda más poder a los partidos políticos. El influyente movimiento Justicia y Espiritualidad no quiere aún participar en el sistema.

TETUAN.- Jamaa Mezuak era el barrio más miserable y peligroso de Tetuán cuando jugaban de pequeños El Chino y otros autores del 11-M. Pero el éxodo rural ha multiplicado los suburbios en la vieja ciudad española y ahora hay calles mucho más siniestras.

Peor aún ahora es el barrio de Ichara, el más alto, el más inaccesible, el más vulnerable, el más marginado.

Subir cada día a sus empinadas callejuelas desde el centro de Tetuán es un castigo para los vecinos que no tienen coche, que son la inmensa mayoría. Las casas no son chabolas, pero están construidas con el llamado block, un material gris incapaz de aguantar un mínimo temblor de tierra. Hay contrabando, droga, un 80% de paro y, por supuesto, es difícil ver en Ichara a una mujer sin velo.

El islamismo se va extendiendo por todo Marruecos, pero especialmente en esta zona norte del país, en torno a Ceuta. Cuando no funciona nada, cuando no hay esperanza, el Islam se va abriendo camino como solución.

«El integrismo es más fuerte aquí», asegura el cónsul español de Tetuán, Carlos Blasco, que ve en la miseria y en la marginación el caldo de cultivo para el islamismo radical e incluso violento.

Frente a este fenómeno, se ha interpretado como una medida de control la decisión del Gobierno marroquí de realizar una reforma administrativa y crear dos nuevas provincias en torno a Ceuta. Donde antes había una sola extensa provincia, ahora hay dos. Una en la zona de Fahs Anjra, al oeste y sur de Tánger. Y otra entre Rincón y Castillejos, al sur de la ciudad autónoma española.

¿Por qué? Se trata de dos zonas de interés especial en Rabat. En el norte, porque incluye el proyecto portuario de Tánger, que intenta arrebatarse tráfico a Ceuta y, sobre todo, a Algeciras. El proyecto incluye además la creación de una zona franca, libre de impuestos, capaz de restar negocio a Ceuta, aunque la próxima entrada en vigor del acuerdo de libre asociación entre la UE y Marruecos puede eliminar el interés de estas ventajas fiscales. Y también interesa el sur de Ceuta, porque, además de ser área de potencial turístico, alberga uno de los palacios reales preferidos de Mohamed VI, gran aficionado a la moto náutica y a disfrutar de ese área marítima mediterránea.

Fuentes diplomáticas españolas no ven perjuicio, sino más bien ventajas en la potenciación administrativa marroquí en la zona, porque puede fomentar el desarrollo económico y frenar el islamismo, especialmente el más integrista.

«Desde los atentados del 11-S, más del 43% de las chicas jóvenes se han puesto velo, por la influencia de unos medios informativos, como algunos canales árabes vía satélite que no paran de difundir sermones y discusiones cada día más extremistas a los jóvenes», afirma el periodista local Jamal Ouahbi. En su opinión, la mala situación económica empuja a los jóvenes en el

área «o bien al narcotráfico o al contrabando, o bien al integrismo». Se da el caso de que la cadena de supermercados Marjane, -controlada por la familia real- recién instalada en Tetuán, rechaza dar empleo a las jóvenes que lleven velo. Con este ambiente, hay que tener en cuenta que la reintegración de Ceuta y Melilla a territorio marroquí es una de las reivindicaciones de los islamistas. Sus responsables, consultados por este diario, rechazan la violencia para conseguir este objetivo. Mustafa Ramid, el dirigente más popular del cada vez más influyente Partido de Justicia y Desarrollo (PJD) asegura que «hay que liberar Ceuta y Melilla en condiciones de cooperación con nuestro vecino español». «No pedimos entrar en una confrontación para recuperar estos territorios ocupados, pero no podemos aceptar que esa situación sea para siempre. Tampoco España puede recuperar por la fuerza Gibraltar».

«Hay que actuar con inteligencia y sabiduría evitando un choque con España, porque lo que es malo para España es malo para Marruecos y viceversa», sostiene Aisa Acharki, líder de la cada vez más extendida asociación Justicia y Espiritualidad (ver entrevista adjunta).

Pero el Gobierno español ve con preocupación este ascenso islamista. Incluso teme que el PJD, que ha aceptado el juego político, intente formar gobierno en esta década con el Istiqlal, el histórico partido nacionalista. En Madrid creen que el régimen no aceptará esta alianza, pero vigilan de cerca los movimientos de ambos partidos.

Según el politólogo marroquí Mohamed Tozy, España no tiene que temer en exceso el fenómeno islamista. «El ciclo en el que el islamismo implicaba cambios sociales radicales ha terminado. Es imposible. Ya no hay sitio para una revolución islámica y los islamistas lo saben, por eso optan por un proceso más bien reformista». «El origen sufí de los máximos dirigentes es una garantía de moderación», según el portavoz de Exteriores del PP y experto en movimientos islamistas, Gustavo de Arístegui.

Ambos se refieren a los islamistas con más adeptos en la sociedad, no a los salafistas, los integristas considerados minoritarios a los que se atribuye el atentado de Casablanca.

El problema para el régimen es que el islamismo se ha convertido a ojos de la población más depauperada en la única alternativa a un poder que no satisface sus necesidades. «No sé si los islamistas son más fuertes que antes, hay que esperar a 2007 y ver cómo se pronuncia la gente en las elecciones. Pero son los que más se movilizan, los más motivados», explica Tozy, autor de respetados ensayos sobre la cuestión.

«Los islamistas están impulsados por una generación que quieren mejorar la situación de clase de sus padres y sus antepasados. Su influencia es importante,

porque en el contexto internacional de angustia, de sentimiento de invasión de Estados Unidos y de otros países occidentales, el Islam se ha convertido en el valor refugio», afirma Tozy. La Guerra de Irak ha disparado este sentimiento.

Además, casi todas las fuerzas políticas tradicionales participan en la coalición de Gobierno y los únicos que hacen verdaderamente oposición en Marruecos son los islamistas.

Según el llamado Informe País que ofrece la Oficina Económica y Comercial de España en Rabat, «si se suman todo los partidos, agrupaciones o movimientos islamistas, se estima que cuentan con el apoyo o simpatía de, al menos, el 40% de la población. El considerable avance islamista de la última década se atribuye al malestar social y al deterioro económico». Según una encuesta de este año del Pew Research Center, el 45% de los marroquíes ven «positiva» la figura de Osama Bin Laden.

Todos los observadores llaman la atención de que el PJD habría ganado las elecciones generales de 2002 y las municipales de 2003 si hubiera podido presentarse a todas las circunscripciones. «En 2002 sólo nos presentamos el 54% y conseguimos 42 escaños, cuando la primera fuerza parlamentaria logró solo 50», subraya Ramid. Y la asociación Justicia y Espiritualidad, fundada con enfoque más radical por el jeque Yasin, ganaría probablemente al PJD, si pudiera convertirse en fuerza política.

«El Estado intenta debilitarnos, pero no creo que pueda», asegura Ramid. Este abogado de Casablanca tuvo que dimitir como portavoz parlamentario del PJD por presión directa del ministro del Interior, Mustafá Sahel. Pero sigue en el comité de dirección del partido, según asegura. «Es verdad que el ministro me quiso echar y dimití para que la relación del Gobierno con mi partido no se deteriorara. Somos una fuerza política responsable».

Ramid atribuye a esta actitud el hecho de que su partido aceptara no presentarse a todas las circunscripciones. El cita el temor de los empresarios y, entre los factores externos, «el miedo, por un concepto falso, de las potencias internacionales». Ramid admite que el impacto de los atentados del terrorismo islamista fuerza al PJD a ser cauto, porque su prioridad de momento es «un Marruecos estable». ¿Y en las elecciones de 2007? «Aún no hemos decidido nada, pero si la situación es la misma, habrá que actuar igual». Pero advierte: «Tenemos vocación de gobernar Marruecos y no siempre habrá un 11-S, un 16-M [Casablanca] o un 11-M». Los islamistas creen que el sistema actual «no es una democracia, es una dictadura enmascarada», según Ramid, y que es necesaria una fuerte reforma. «El rey debe ceder poderes e instaurar una monarquía parlamentaria. Incluso por su propio interés, porque la gente le va a atribuir a él todos los problemas si la situación no va bien».

El PJD y Justicia y Espiritualidad no han unido fuerzas hasta ahora y sus representantes no la vislumbran, pero la fuerza de uno y otro se hace cada vez más difícil de frenar.

Además, hay un pecado original. «El régimen alentó en su momento el islamismo para acabar con la oposición de izquierdas y ahora se ve con un problema muy difícil y sin poder dar marcha atrás», señala el presidente de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos , Abdelhamid Amine.

© Mundinteractivos, S.A.

EL MUNDO

Miércoles, 13 de octubre de 2004. Año XV. Número: 5.422.

MUNDO

RADIOGRAFIA DE MARRUECOS (IV) / NUESTRO 'AMIGO' DEL SUR / AUMENTA EL CULTIVO DE DROGA / LA MISERIA DEL RIF

El líder mundial del cannabis

CARLOS SEGOVIA. Enviado especial

En la zona de Marruecos más cercana a España, en el Rif, se dan las mayores cotas de miseria del Reino. Y, lo que es peor, la principal fuente de riqueza es el cultivo de droga. La Agencia de Naciones Unidas, en un estudio aceptado por el Gobierno marroquí, sitúa a Marruecos como el primer exportador y productor de hachís del mundo al contar con, al menos, 134.000 hectáreas dedicadas a esta polémica plantación. El Gobierno marroquí está acusado de no actuar con determinación en el caso y de tolerar la producción, pero la UE admite que es difícil actuar de otra forma, porque no existe todavía una alternativa económica razonable para evitar que las 800.000 personas que viven del hachís puedan encontrar otra fuente de vida. El oscuro negocio de la droga hace que amplias regiones del norte marroquí vivan con las reglas del viejo oeste, sin apenas presencia del Estado. A esta caótica situación se unieron además el pasado noviembre unas fuertes inundaciones y, en el mes de febrero, el terremoto de Alhucemas, que destruyó 13.000 viviendas y provocó la muerte de centenares de personas. Todo ello en el Rif, el área considerada más díscola tradicionalmente contra el poder central, ya fuera español o de la dinastía alauí.

KETAMA / ALHUCEMAS.- Silbidos ofreciendo droga, adolescentes en el borde de la carretera vendiendo bates de béisbol, quinceañeros conduciendo grandes Mercedes, camellos españoles o franceses... No hay duda, el conductor se aproxima a Ketama, la ciudad rifeña al Norte de Marruecos, considerada la capital mundial del hachís.

Lo primero que se ve es el solitario edificio de la Gendarmería Real, pero después, en las calles de Ketama, ni rastro de presencia policial. Parece como si los últimos uniformes que se vieron por allí fueron los de los generales españoles del Ejército de Africa reunidos en el cercano Llano Amarillo un 12 de julio de 1936 para iniciar la sublevación contra la II República española. Como en el viejo oeste, Ketama parece una ciudad sin más ley que la de pagar religiosamente cuando se quiere mercancía.

Aunque el cultivo de hachís en esta región central del Rif data de siglos, Hasan

l autorizó formalmente el kif (la planta y el producto derivado de la resina) a las cinco aldeas de las tribus Ketama y Beni Jaled en 1890. Desde entonces, ningún monarca de la dinastía alauí ha erradicado la producción.

Mohamed VI autorizó el pasado año un acuerdo entre el Gobierno y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen (ONUDD) para intentar evaluar la producción de hachís en el norte del país. El resultado del informe es que existen 134.000 hectáreas cultivadas que convierten a Marruecos en el primer productor y exportador mundial. Un total de 96.600 familias se dedican al cultivo y, en total, intentan vivir de ello 800.000 personas.

La producción supone el 27% del total cultivable en las cinco provincias analizadas y se estima que deja al año a cada familia unos 2.200 euros. ¿Cómo es posible que en la zona más próxima a la Unión Europea un socio privilegiado como es Marruecos albergue tal plataforma de producción de una sustancia ilegal?

«Hemos hecho un programa con gran esfuerzo para encontrar posibilidades de diversificación de cultivos y el resultado técnico es plantar árboles frutales, pero en unas condiciones muy difíciles. No hemos encontrado alternativas», lamenta el jefe de la delegación de la Comisión Europea en Marruecos, Sean Doyle.

«Hay un enfoque ahora que recomienda que, en vez de tener una comunidad rural sin policías o sin presupuesto estatal, hay que reconocer la existencia de una comunidad urbana con derecho a elegir a sus representantes, su consejo, que debe pagar impuestos y que debe beneficiarse de financiación del Estado. Eso es lo que hay que hacer», agrega.

Doyle critica que parte de la culpa la tiene la propia UE con «la ambigua política europea con respecto al hachís». «El mercado europeo existe y por eso hay producción», sostiene.

La UE está financiando una nueva carretera en Alhucemas que debe contribuir al desarrollo de la zona, pero, según el eurofuncionario irlandés, «nos haría falta 10 veces más dinero para poder tener impacto». El Gobierno español ha situado el Rif como un área prioritaria en la nueva etapa de cooperación abierta por el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Angel Moratinos.

Mientras tanto, el cultivo crece. Según Le Journal la extensión ha aumentado un 30% en los años de reinado de Mohamed VI. La publicación Economie et Enterprises asegura que ya se han detectado cultivos en las proximidades de Fez y en la costa atlántica y cita una fuente policial que pronostica campos de droga en la próxima década incluso en los alrededores de Casablanca.

Un estudio del periodista Philippe Bordes y el sociólogo Alain Lambrousse atribuye la laxitud policial marroquí a que ya en la época de Hassan II hubo

instrucciones de permitir el negocio para «preservar la lealtad de la región republicana que es el Rif, tradicionalmente hostil al poder central». También señalan la fuente de divisas que supone la droga, puesto que los traficantes repatrián una parte de sus beneficios en Europa a Marruecos, porque en este país «los controles de blanqueo de droga son casi inexistentes». El profesor Pascual Moreno cifró en 1997 en 2.000 millones de dólares los ingresos en Marruecos por la venta de droga, el doble que por turismo. Esta cantidad es poco dinero comparado con los 12.000 millones de dólares que, según el economista Mehdi Lahlou, ingresan posiblemente las redes por la venta del hachís del Rif. Eso convierte a los marroquíes en productores, pero, al mismo tiempo, en parientes pobres del negocio.

No obstante, Bordes y Lambrousse consideran evidente que «en una país tan policial como Marruecos no se pueden exportar miles de toneladas de hachís sin amplias complicidades». No sólo en las altas esferas, sino en el extranjero. Según su estudio, los llamamientos por televisión del ex ministro del Interior, Driss Basri y las redadas organizadas por su sucesor, Mustafá Sahel, no son sino «cortinas de humo» de una política permisiva.

El diario Le Monde llegó a publicar la pasada década que había cultivos en propiedades de la familia real, lo que fue desmentido categóricamente por Hassan II. Posteriormente, no se descartó que existieran plantaciones en terrenos reales sin conocimiento de Palacio.

Bordes y Lambrousse apuntan que al régimen le conviene mantener el cultivo para poder así justificar una movilización militar y policial en el norte del país, que sirva, por un lado, de disuasión para la entrada de elementos islamistas procedentes de Argelia; y de distracción al Ejército y al aparato de seguridad lejos de los centros de poder en Rabat.

Sin embargo, esa movilización y más habría sido necesaria el pasado febrero cuando se produjeron temblores diarios en la región de Alhucemas provocando centenares de muertos.

Según las cifras oficiales, 521 fallecidos. Según la Coordinadora para el Seguimiento del Terremoto de Alhucemas -que aún agrupa a 43 Organizaciones No Gubernamentales- se registraron al menos 667 muertes.

Al menos 13.000 viviendas quedaron destruidas y siete meses después «aún están pendientes de reconstruir más de la mitad», afirma Omar Moussa, portavoz de la Coordinadora. «El problema», subraya, «es que el invierno se acerca». Doyle resalta que el terremoto «siguió al problema ya existente y explosivo del chabolismo».

Muchos de los damnificados en Alhucemas se habían negado hasta ahora a

recibir ayuda oficial, por considerarla insultante. «El Gobierno ofrece 30.000 dirhams (2.865 euros) y con eso no se puede construir una casa», señala el portavoz. No obstante, los rifeños están aceptando ese dinero, que es mejor que nada.

No todos consiguen ni siquiera ese dinero, porque el Gobierno centra sus ayudas en las poblaciones más afectadas, que no son todas. En aquellos terribles días de febrero, a él -no quiere que se conozca su nombre- se le cayó el muro del cobertizo que tiene dentro de casa y se agrietó en el cuarto, por así llamarlo, donde duermen sus siete hijos.

Los temblores del terremoto de Alhucemas -que siguieron a las inundaciones de noviembre- continuaron días y días y la familia tuvo que dormir a la intemperie durante semanas. Ni tenía antes ni tiene ahora luz y, por tanto, no tiene televisión.

Pero en su pequeña aldea próxima a Alhucemas llegó el eco de que había ayuda internacional y que el propio rey Mohamed VI había prometido apoyo a los que sufrieron los efectos del terremoto. Los que sabían escribir le ayudaron a redactar los papeles en el local de la Gendarmería Real más próximo.

El gendarme le aseguró que su petición de ayuda sería trasladada a Rabat. La ayuda no llegaba y él tuvo que reconstruir su casa poco a poco, mientras su esposa, sus siete hijos y sus terneras seguían a la intemperie. «Tres meses después», asegura, «llegó un envío de Rabat». Una tienda de campaña con espacio sólo para cuatro personas, «ni siquiera cabían todos mis hijos». En su pueblo tuvieron la suerte de no morir por el terremoto, como en otras zonas rurales de Alhucemas, pero para él, como para otros supervivientes en esta paupérrima zona de Marruecos, el peor temblor es mantener una vida sin horizonte.

EL MUNDO

Jueves, 14 de octubre de 2004. Año XV. Número: 5.423.

MUNDO

RADIOGRAFIA DE NUESTRO 'AMIGO DEL SUR' (V)

Marruecos pide a España que repatrie a los 'sin papeles' al Sáhara en vez de a Tánger

El Gobierno se niega para no reconocerle la soberanía

CARLOS SEGOVIA. Enviado especial

Además de ser origen de un conflicto político que dura 29 años, el Sáhara Occidental se ha convertido en una lanzadera de emigración clandestina de primer orden. Entre España y Marruecos han interceptado a 8.000 emigrantes en los ocho primeros meses del año, lo que, unido a los que logran llegar a tierra o los que trágicamente quedan en el mar, se puede estimar que una media diaria de 40 clandestinos salen cada noche de las costas saharauis con destino a Canarias. La policía española y el Frente Polisario creen que Marruecos no es tan activo para luchar contra el fenómeno, porque sirve para presionar a España y que apoye a Rabat en el conflicto saharauí. Las autoridades marroquíes lo niegan y piden tres medidas a España. Por un lado, más medios y mediación ante la UE para que Marruecos sea más apoyado en la lucha contra la emigración clandestina. También reclaman que el Gobierno español acepte repatriar a los marroquíes detenidos en Canarias al Sáhara y no a la frontera de Ceuta, porque así podrían ser más eficazmente interrogados. Y piden que se matice el efecto llamada de Canarias que ofrece un buen trato a los subsaharianos y asiáticos, mientras discrimina a los marroquíes. Mientras tanto, la ONU se da más tiempo para buscar una solución al conflicto político y los saharauis debaten volver a la lucha.

EL AAIUN.- Si hace buen tiempo, esta misma noche saldrán otros 40 emigrantes clandestinos hacia Canarias desde alguna playa entre Tarfaya y El Aaiún. Al menos, eso dice la estadística. La mayoría de los que zarparán esta noche procederá de países subsaharianos, seguramente de Malí. Habrán recorrido antes un inmenso camino desde su país hasta Argelia por las viejas rutas tuareg.

Allí, contrabandistas argelinos o incluso miembros de las fuerzas de seguridad de ese país, les habrán ayudado a entrar en territorio marroquí por la frontera

de Uchda, previo pago de hasta 3.000 euros por cabeza.

Al grupo se habrán unido ya emigrantes de la India o Pakistán llegados legalmente a Argelia por avión con el mismo objetivo de ir a la Unión Europea a través de España.

En la frontera de Uchda, los miembros marroquíes de la red les habrán transferido hasta Casablanca, donde habrán aguardado el momento oportuno para pasar a la última etapa: el traslado al Sáhara Occidental. Quizá se hayan incorporado ya al grupo clandestino marroquíes desesperados y otros subsaharianos que han entrado con visado en Marruecos como turistas y que lo único que buscan es entrar en contacto con las redes de inmigración ilegal para ir a España.

Ya una vez en los alrededores de Tarfaya, posiblemente en los antiguos depósitos españoles de agua o en alguna de las grutas costeras, habrán esperado finalmente el momento de zarpar fuera de la vista de helicópteros de las fuerzas de seguridad marroquíes. Por otros 3.000 euros y tras seis horas de viaje esperan llegar por fin al destino ansiado, las Islas Canarias.

La cifra media de 40 clandestinos al día se desprende de sumar a los 8.000 emigrantes detenidos, tanto en el archipiélago como en el Sáhara en los ocho primeros meses del año, una mínima estimación de los que logran superar los controles y llegar clandestinamente a tierra o los que trágicamente perecen ahogados.

¿Por qué ir a España desde el Sáhara y no desde Tánger? «Marruecos ha hecho más la vista gorda en el Sáhara para presionar políticamente a España y que acepte las tesis marroquíes en contra de la autodeterminación saharauí», aseguran fuentes policiales españolas expertas en inmigración clandestina.

«¡Por favor, cómo no van controlar los marroquíes una franja de 25 kilómetros de costa en un territorio tan militarizado como éste!», corrobora Ahmed, activista pro Derechos Humanos y miembro del Frente Polisario. «Ellos saben dónde se esconden los emigrantes antes de zarpar. Todos lo sabemos. Lo que pasa es que quieren hacer presión a España permitiendo que haya una presión migratoria insoportable en Canarias», agrega.

«Eso es falso, no hay ninguna táctica política. Queremos combatir la inmigración clandestina. Estamos haciendo un esfuerzo muy importante y trabajamos todos los días pese a la inmensidad y la adversidad del terreno», replica Mohamed Gherrabi, el wali (gobernador de gobernadores) en la principal área del Sáhara.

Gherrabi elogia el trabajo coordinado que se está realizando con la Guardia

Civil española, pero hace una petición a España: «Sería muy importante que los marroquíes detenidos en Canarias fueran repatriados aquí y no a la frontera de Ceuta».

El Gobierno español se niega teóricamente a secundar esa idea, porque repatriar a ciudadanos marroquíes a El Aaiún sería reconocer la autoridad de Marruecos en el Sáhara.

«Los españoles deben ser conscientes de que si pudiéramos interrogar aquí a los marroquíes que detienen en Canarias nos sería más fácil dismantelar las redes», insiste el wali, designado directamente por Mohamed VI para gobernar el área más sensible de su territorio.

En su opinión, hay otro aspecto en que España debe hacer un esfuerzo. «En Canarias hay un efecto llamada porque los africanos saben que se les trata muy bien, no como a los marroquíes». Gherrabi cree que se discrimina a sus compatriotas emigrantes frente a los subsaharianos o asiáticos y eso anima a estos últimos a embarcarse en la aventura desde el punto más cercano, el Sáhara.

Para Gherrabi, «es esencial aumentar la cooperación entre nuestro país y España, hay que profundizar lo que se está haciendo ya. España debe ser nuestro abogado en la Unión Europea».

La UE ya ha aprobado el despliegue de radares móviles en Marruecos, compatibles con los españoles, para ser colocados incluso en el Sáhara, según afirma el jefe de la delegación de la Comisión Europea, Sean Doyle. «Pero necesitamos más medios, más vehículos todoterreno, tenemos muchas insuficiencias», agrega el alto funcionario marroquí.

Fuentes diplomáticas españolas creen que está habiendo un mayor esfuerzo marroquí con la emigración en el Sáhara y, en general, en todo el territorio que controlan. «Hay instrucciones de muy arriba», subrayan. El régimen de Mohamed VI considera de alta importancia el acuerdo de asociación con la UE, y es consciente de que debe hacer un mayor esfuerzo para no tener problemas con Bruselas. Gherrabi aconseja mirar más en este asunto a su vecino del Este. «Argelia es un verdadero espacio de emigración clandestina», afirma. «Los emigrantes clandestinos que nos llegan sólo pueden entrar por Argelia, así que los devolvemos allí cuando los detenemos y eso nos cuesta mucho dinero en transporte y manutención, unos 28.000 dirhams [2.675 euros]», resalta.

El problema de la emigración se añade al conflicto que, desde hace 29 años, enfrenta a Marruecos con los saharauis independentistas. Mohamed Daddach, símbolo de la resistencia saharauí, mantiene su mirada de acero en su domicilio de El Aaiún, cuando ha cumplido los 47 años de edad. La mitad de su vida, 23

años, los ha pasado en las peores cárceles de Marruecos.

Daddach, que consagra sus días ahora a defender los Derechos Humanos de su pueblo, fue torturado, incomunicado y llegó a estar condenado a muerte por desertor. Fue liberado en 2001 gracias a la presión internacional. Pero aún no se siente libre. «Nos han quitado los pasaportes a los activistas pro Derechos Humanos. Nos los arrebataron el 23 de mayo de 2003 cuando íbamos a Ginebra. No nos dejan explicar nuestra causa en los foros internacionales».

«Estoy bajo control vigilado, no tienen derecho, pero me vigilan», afirma Daddach. En El Aaiún, se respira presencia policial por doquier. Siempre parece haber un oído que escucha, una mirada obsesiva. No obstante, EL MUNDO pudo acudir al domicilio de Daddach sin obstáculo aparente, lo que no habría sido tan fácil hace poco tiempo. «Aquí hay libertad, nosotros sólo intervenimos cuando se intenta alterar el orden público», sostiene el wali de El Aaiún.

¿Hay un cambio? Daddach y sus compañeros se muestran escépticos. «Hasan II era un dictador, pero al menos aceptó el Plan Baker, no como su hijo». Ellos critican que Mohamed VI no haya secundado el plan del ex secretario de Estado de EEUU, James Baker, de dotar de autonomía al Sáhara a la espera de un referéndum de autodeterminación.

Los saharauis debaten emplear la violencia para salir del impasse actual. «Nadie puede prever el futuro salvo Alá, pero mientras que no haya solución, todo el posible», manifiesta Daddach. Otros son más rotundos (ver entrevista adjunta). Baker ha declarado recientemente que puede haber otro problema y es que el Sáhara se convierta en «base de terroristas» debido a una posible implantación de salafistas. «Ese riesgo no está aquí, porque tenemos el territorio muy bien controlado. Donde existe es en el sur de Argelia», asegura Gherrabi.

Respecto al conflicto saharauí, el wali cree que el Estado marroquí «está haciendo un gran esfuerzo en la promoción de este territorio. Los españoles no hicieron nada. Nosotros hemos construido infraestructuras, puertos, aeropuertos...».

Jamal, profesor marroquí en El Aaiún, cree que cada vez hay más integración y que las jóvenes generaciones se preocupan sólo por tener un trabajo y bienestar. No la independencia. Y cuenta la anécdota de que «es más barato para un saharauí casarse con una marroquí, porque la boda sólo cuesta un cordero y un saco de azúcar. Si elige a una saharauí, tiene que reunir cuatro camellos y 50 objetos. Además, como tiene que invitar a toda la tribu afectada se gasta por lo menos 200.000 dirhams [19.000 euros], mientras que una boda marroquí no lleva más de 40.000». Daddach asegura que, al contrario, los más jóvenes están presionando para que el Frente Polisario sea más activo. En

cuanto a él, pensó en suicidarse en su etapa más dura en prisión. «Pero lo más importante para mí ha sido y es nuestra causa, la causa del Sáhara».

© Mundinteractivos, S.A.

EL MUNDO

Viernes, 15 de octubre de 2004. Año XV. Número: 5.424.

MUNDO

RADIOGRAFIA DE MARRUECOS (Y VI) / NUESTRO 'AMIGO' DEL SUR / LA DUREZA DEL REGIMEN

Mil 'terroristas' detenidos y 2.000 vigilados

CARLOS SEGOVIA. Enviado especial

La llegada al trono de Mohamed VI extendió esperanza sobre los que habían sufrido abusos en los llamados años de plomo de la era de Hasan II. Pero los atentados del 11-S y de Casablanca, y el deseo de Marruecos de conectar con la Casa Blanca, han provocado un retroceso en el respeto de los Derechos Humanos, según coinciden las organizaciones internacionales. Los islamistas han resultado especialmente acosados. Un millar continúa aún detenido, acusado de practicar terrorismo y otros 2.000 están siendo estrechamente vigilados por los servicios secretos. A esta vuelta a las prácticas de la vieja guardia hay que agregar avances como la promulgación de un nuevo código de la mujer desconocido en Marruecos y en los países árabes. Pero frente a este avance, considerado insuficiente por las asociaciones feministas, persisten la pena de muerte y restricciones a las libertades públicas y de expresión. Amnistía Internacional ha denunciado especialmente la existencia de un centro de detención de carácter «ilegal» en las proximidades de Rabat, el de Témara. La Comisión Europea admite la existencia de abusos, pero cree que se ha producido un cambio en el régimen en este punto desde principios del verano. La UE reclama más esfuerzo en el respeto a los Derechos Humanos en vísperas de la entrada en vigor de su acuerdo comercial preferente.

CASABLANCA.- A Rafa aún se le humedecen los ojos al recordar. El vigilante degollado, más de 150 personas en el restaurante, 41 muertos, 100 heridos, el negocio destrozado... La Casa de España de Casablanca volvió a abrir su puertas un año y medio después del atentado y la vida sigue, aunque su presidente, Rafael Bermúdez, ha tenido que ceder la gestión a socios marroquíes, «porque no podía con tanto gasto».

En la entrada del club privado en la vieja calle Lafayette de Casablanca ahora hay una puerta de hierro que el vigilante sólo abre si el que intenta entrar no despierta sus sospechas. Y no hay muchas más medidas aparentes de

seguridad. Rafa quiere cumplir lo que le dijo el Rey Juan Carlos: «Hay que abrir otra vez para que no se salgan con la suya». Y espera que la prometida ayuda española llegue por fin. ¿Y los culpables del atentado? «No sé si los han detenido». Rafa no está en eso.

Sin embargo, tras el atentado contra la Casa de España, el Gobierno marroquí mantiene detenidos a un millar de presuntos terroristas integristas, según cifras oficiales. «Estamos estudiando cada expediente de los que están en la cárcel, porque está claro que no son todos terroristas y que hay acusados que están en prisión simplemente por delitos de opinión», afirma a este diario el presidente de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH), Abdelhamid Amine. A estos encarcelados hay que añadir que, según un informe de la Dirección de Vigilancia del Territorio, los temibles servicios de la DST, hay otros 2.000 islamistas «peligrosos». Según este informe, publicado por el diario Al ahdat Al Maghribia - y no desmentido-, este ingente número de personas «están identificados y vigilados», aunque aún «no existen pruebas definitivas para su detención».

¿Amenaza terrorista multitudinaria o excusa del régimen para controlar a los ciudadanos? Según ha declarado el ministro marroquí del Interior, Mustafa Sahel, a El País, no todos los detenidos responden a la investigación por el atentado de Casablanca y atribuye un número indeterminado a los presuntos terroristas que pretendían amenazar el tráfico mercante en el Estrecho de Gibraltar. Y otros a la introducción el pasado año de la Ley Antiterrorista, que es rechazada por las asociaciones de Derechos Humanos. Según lamenta Amnistía Internacional, «la nueva ley prolongó hasta a 12 días la incomunicación de los detenidos y amplió el campo de aplicación de la pena de muerte». Además, permite «que incluso actividades políticas pacíficas puedan ser castigadas», destaca Haizam Amirah en el último informe del Real Instituto Elcano. Amirah teme una «vuelta a las viejas prácticas» y apunta que Mohamed VI ha vuelto recurrir a la «vieja guardia de su padre».

«La campaña de represión», según Amnistía Internacional, comenzó en 2002 tras la promesa de Marruecos de apoyar a un EEUU conmocionado por el 11-S-. «Desde entonces, ha quedado demostrado el aumento brutal de los casos de tortura y de malos tratos en el marco de las medidas antiterroristas en Marruecos y en el Sáhara Occidental». Tanto esta organización como otras describen diferentes casos de violaciones de Derechos Humanos, como las detenciones ilegales, torturas, manipulación de testimonios, ausencia de testigos, falta de pruebas inculpatorias y denegación del derecho a la autodefensa, entre otros. Y el control judicial no es visto con esperanza. «La situación del sistema judicial marroquí es muy grave. Hay corrupción y falta de preparación, sostiene el presidente de AMDH.

Militantes islamistas. En la calle Sidi Talha, del barrio más inhóspito de

Tetuán, Mohamed, de 34 años, costurero de profesión, asegura que «nunca perdonará» lo que le han hecho. Fue detenido como presunto terrorista salafista cuando «nada tengo que ver». En su opinión, «los verdaderos salafistas están forrados de dinero, que han pagado hasta 10 millones de dirhams [casi un millón de euros] para que les soltasen a cambio». Mohamed cree que él y otro costurero amigo suyo y también detenido, son simples «cabezas de turco». Según informa Jamal Ouhabi fueron apresados dos veces tras el atentado de Casablanca y tras el de Madrid y luego tuvieron que ser puestos en libertad. «Pasamos las dos veces una semana entera siendo interrogados de la DST y los servicios secretos de España».

«Nos hacían preguntas absurdas como: qué libros leíamos, en qué ciudad nos gustaría vivir o por qué teníamos barba». El interrogatorio duraba muchas horas y llevaban los ojos vendados, manos esposadas y recibían continuas bofetadas y insultos. «Nos tapaban los ojos, no sabíamos quién nos estaba interrogando ni cuántos eran», cuenta Mohamed.

Amnistía Internacional evoca casos como el Abdelhak Bentassir, detenido oficialmente el 26 de mayo de 2003 acusado de perpetrar el atentado de Casablanca y fallecido dos días después por «muerte natural debido a problemas cardíacos», según la autopsia. La familia asegura que fue detenido en realidad el día 21 y que se encontraba en perfectas condiciones de salud.

La organización denuncia que el centro clave para interrogatorios y torturas es el de Témara. Situado a 15 kilómetros de Rabat y gestionado por la DST incluye manguerazos de agua helada y descargas eléctricas entre los métodos de tortura utilizados, según las asociaciones de Derechos Humanos, que incluso han organizado manifestaciones ante la puerta de la prisión. «Témara no es un centro de detención legal. Muchos detenidos no están en condiciones legales, por tanto, han sido secuestrados. No sabemos la situación actual en Témara, pero hemos recibido decenas y decenas de quejas de personas que han pasado por allí y que después han recuperado la libertad o transferidos a otras prisiones, juzgados y condenados», afirma el presidente de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos.

«En Guantánamo se ha amenazado a detenidos con transferirlos a Témara, porque la tortura es una práctica común y no sólo para detenidos políticos, sino también a delincuentes comunes», agrega. «Marruecos aún no ha definido como delitos actos susceptibles de ser calificados como tortura», lamenta la Comisión Europea en su último informe sobre Marruecos. El representante de Bruselas en Marruecos, Sean Doyle, considera «evidente» que ha habido «abusos» tras los atentados, pero «hay un cambio desde el principio de verano, una disposición a hablar de ello por parte de Marruecos expresada por su majestad. Eso es muy positivo». «Además -agrega-, es el primer país árabe que ha aceptado crear un

comité de Derechos Humanos en sus acuerdos de asociación con la UE».

Pena de muerte. No se aplica desde 1993, pero no está abolida y tras el atentado de Casablanca se han dictado ya 17 condenas a la pena capital.

Libertades públicas. Sigue siendo necesaria una autorización discrecional del Ministerio del Interior para convocar manifestaciones. La sección de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos en el Sáhara Occidental no tiene permiso para actuar. A ciudadanos incómodos se les niega el pasaporte.

Libertad de Expresión. Ali Lmrabet fue condenado a tres años de prisión y a la prohibición de sus semanarios por «ultraje al Rey y a la integridad territorial». Una decena de periodistas han sido detenidos en los últimos años y los semanarios independientes sufren continuos acosos e intentos de asfixia financiera por parte de las autoridades, según Reporteros sin Fronteras. Ahmed Sanussi, alias Bziz, humorista y autor teatral censurado por el régimen por sus críticas al poder, reivindica el atropello que sufre y pide que los marroquíes «no sean tratados como ganado, sino como ciudadanos».

La mujer. Un avance de Mohamed VI es la promulgación, en contra de los islamistas, del nuevo código de la mujer, elevando de 15 a 18 años la edad mínima del matrimonio, reconociendo una responsabilidad conjunta en la familia y restringiendo la poligamia. «Pero sigue sin reformarse la herencia, de modo que cualquier varón próximo al que fallece hereda antes que su esposa o hijas», se lamenta Leïla Rhiwi, presidenta de la Asociación Democrática de Mujeres de Marruecos. También resalta que «una ley no es nada si no es accesible» y que con la alta tasa de analfabetismo de la mujer marroquí si no hay una gran campaña en el país para explicar las nuevas normas, no se aplicarán donde más se necesita». Rhiwi resalta que el aborto, al seguir prohibido, es clandestino y se practica «con métodos peligrosos».

'Años de plomo'. Otro avance, según el politólogo Mohamed Tozy, de Mohamed VI es la creación de la llamada Comisión de Verdad y Reconciliación, que quiere esclarecer, sin penalizar a los culpables, los abusos durante los llamados años de plomo en la etapa de Hasan II.

Amine, detenido durante 12 años bajo el mandato del padre del actual rey, tiene claro el futuro: «Mientras no haya una Constitución que reconozca el pueblo como fuente de todo poder y mientras que no haya diferencia de poderes, no sólo el legislativo, judicial y ejecutivo, sino el religioso; y en tanto que no haya un reconocimiento en la constitución de los Derechos Humanos, no hay estado de derecho y todo es cosmética».